

## **Parte II**

### **Consecuencias sociales e institucionales de las violaciones sistemáticas de los DPM en la Argentina**

## Capítulo 7

### **La otra cara de la moneda: las nuevas organizaciones de la pobreza y su impunidad ante la ley**

#### **La deuda interna**

Lamentablemente, resulta imposible verificar empíricamente la multitud de micro procesos de causa y efecto por los cuales la suma de estas cuantiosísimas sustracciones al colectivo social generaron la pauperización de la mitad de nuestra población.

No obstante, no hay duda de que si sumáramos los fondos que se canalizaron desde el Estado hacia la burguesía depredadora a través de bicicletas financieras, autopréstamos, estatizaciones y licuaciones de deuda privada externa e interna, sobrepagos para las empresas privadas proveedoras de las públicas, privatizaciones subsidiadas de empresas del Estado, maniobras a través de bancos provinciales sujetos a legislaturas locales, y otros subsidios diversos a los menos pobres, tendríamos un total muy superior a la deuda soberana argentina. Esta suma alcanzaría para que cada ciudadano tuviese una vivienda digna y acceso a agua corriente, cloacas y una educación pública ni mejor ni peor que la que teníamos en 1940.

Esta es la verdadera deuda interna de la que alguna vez se ha hablado. Considérese que ya a fines de la década del '50 la deuda del Estado con las Cajas de jubilación, contabilizada en bonos OPS, representaba el 47% del PBI, alcanzando posteriormente cifras mucho mayores.<sup>1</sup> Agréguese el posterior vaciamiento de las AFJP, producido por la operación tenaza que primero les obligó a comprar bonos del Estado, y cesación de pagos mediante, les forzó luego a aceptar el canje de deuda con que se estafó también a los ahorristas extranjeros. Considérese también el verdadero desfaldo implícito en la involución de nuestros sistemas de educación y salud pública, desde lo que eran en 1940 a lo que son en 2005. ¿Cuánto costaría restituirlos?

Esa cifra también es parte de lo que se debe, ya que la burguesía goza de sistemas privados de educación que son adecuados, y de clínicas privadas que causan envidia a la clase media europea. Decir que el total general de esta deuda interna equivale a dos veces la deuda externa es pecar de conservador.

Por supuesto que si los latrocinios que hemos descrito no hubieran deformado la economía de un país naturalmente rico, tanto la burguesía como las clases subordinadas serían mucho más prósperas. La quiebra del contrato social fue para mal de todos. Pero el contrato fue quebrado, repetidamente, por esa burguesía que capturó al Estado y que convirtió en idiotas útiles hasta a los sanguinarios generales de la dictadura. Además, la burguesía tiene fondos depositados en el exterior que son superiores al total de nuestra deuda externa pública. Son

los pobres, pues, los acreedores a los “Bonos DPM” que propongo como modesta compensación para recomponer el contrato social.\*

Si a ojo de buen cubero calculáramos la deuda interna en unos 200.000 millones de dólares (perdonando a los ricos los intereses debidos a los pobres), tendríamos el equivalente de un bono de 10.000 DPM por cada uno de nuestros veinte millones de pobres, o sea entre 40.000 y 50.000 DPM por familia tipo, o en su defecto 10 millones de viviendas de 20.000 dólares cada una. O sea que no habría más gente técnicamente “pobre”.

Naturalmente que sería imposible extraer estos recursos de la burguesía sin una guerra civil. Pero este mero hecho pone de manifiesto una vez más que el orden ha perdido su legitimidad y que los delitos de los pobres violan la ley positiva pero no el derecho natural.

No obstante, los órdenes sustentados en la fuerza no se imponen impunemente. Todo termina socavado. Como se dijo anteriormente, una vez que los ciclos de vaciamiento con estatización de deuda privada se acentuaron, la corrupción de la clase política se profundizó, porque sus miembros están conscientes de que parte de su función es enriquecer aún más a los privilegiados. Por lo tanto, exigen participar en las ganancias. Lo menos que hacen es vender leyes.

Cómo es lógico, esta conducta se derrama hacia los funcionarios. De este modo proliferaron diversos negocios espurios con “privatización” de las agencias del Estado: por ejemplo, el uso de servicios de inteligencia para suministrar información a quien la compre; extorsiones recíprocas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial; múltiples tranzas entre policías, jueces y mafiosos; “territorios liberados” donde la policía deja un vacío para que delincuentes amigos puedan operar, y *last but not least*, maniobras demagógicas de políticos dispuestos a dispensar una doble vara de justicia toda vez que una organización de pobres viola la ley usurpando un terreno o cortando un camino para obtener beneficios extorsivamente.

Fue gracias a esta dinámica involutiva que las organizaciones de la nueva pobreza argentina nacieron, crecieron y se multiplicaron, en un contexto donde el orden perdió legitimidad y se fundamenta sólo en recursos represivos que, siendo cada vez más escasos, raramente se aplican contra conductas percibidas como representativas de un sector social. Ha surgido un nuevo derecho no escrito. Las agrupaciones de los pobres se cuentan entre sus beneficiarios.

### **El mito ingenuo**

De estas organizaciones, las más conocidas corresponden a lo que se conoce como “movimiento piquetero”. Desde la izquierda su ascenso se percibe como un triunfante *crescendo* liberador.† Desde la derecha se vislumbra como una rebelión de bandas

---

\* Aquí transformo la sigla representativa de los derechos de propiedad de las mayorías (DPM) en una novel unidad de cuenta convertible a dólares.

† “No llores por Argentina. Las luchas en Argentina son uno de los rayos de esperanza más importantes en el mundo en los últimos años. (...) Este libro es la historia (...) de un movimiento que quiere cambiar el mundo

delictivas que no se reprime debido al oportunismo y demagogia de la clase política. Ninguna de estas interpretaciones toma en cuenta el hecho de que la erosión institucional sufrida por el país conduce necesariamente a fenómenos de esta índole, que son parte de una involución. Desde su reduccionismo, la izquierda insiste en vislumbrar la problemática con un sesgo clasista y rehúsa reconocer que el piqueterismo es una manifestación más de procesos de largo plazo que han empobrecido a todas las clases sociales argentinas (aunque a algunos segmentos más trágicamente que a otros). Desde su voluntarismo, la derecha insiste en suponer que el problema puede suprimirse con decisión e integridad, a fuerza de represión inteligente, sin compadecerse de que la situación fue engendrada por sistemáticas violaciones a los derechos de propiedad de los pobres.

Una versión simplista de la historia nos contaría que los piqueteros versión argentina emergieron con los hechos acaecidos en Cutral-Có, provincia del Neuquén, el 20 de junio de 1996. Ese día, trabajadores despedidos de YPF y sus vecinos cortaron la estratégica ruta nacional 22. Laura Padilla, una maestra que se enfrentó a quienes intentaron reprimir el acto, se convirtió en caudilla. Seis días después el gobernador Felipe Sapag firmó con ella un acuerdo: las rutas quedaban libres y a los manifestantes se les otorgaban subsidios del Estado.

Este episodio anticipó no sólo la protesta extorsiva exitosa sino también el papel importante que ocuparían las mujeres en el incipiente fenómeno. La pueblada se repitió en otras ciudades petroleras: Plaza Huincul (Neuquén), Tartagal y Gral. Mosconi (Salta). Como recuerdan Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, autores del trabajo más completo hasta la fecha sobre el tema, estos primeros piqueteros “se encontraban entre los (ex) trabajadores mejor pagos del (ex) Estado de bienestar, con una carrera estable que incluía familias y generaciones completas socializadas en el marco de la estabilidad y el bienestar social”.\*

Al año siguiente, en Mar del Plata y ya en otro contexto, Esteban Emilio Alí imitó a Padilla. Encabezó a cincuenta familias que cortaron la ruta 88. Después de una semana consiguieron 2.700 Planes Trabajar. Los cortes de ruta se convirtieron en un mecanismo habitual para la obtención de prebendas. Según Nicolás Iñigo Carrera, hacia fines del gobierno de Carlos Menem ya se habían registrado 685 piquetes.<sup>2</sup> Por su parte, Svampa y Pereyra elaboraron estadísticas que documentan el dramático eclipse de la huelga como instrumento de lucha de los trabajadores, frente al rápido ascenso de los cortes de ruta.<sup>3</sup>

Tres años después de su iniciativa marplatense, el 5 de mayo de 2000, el precursor Alí era apresado en ocasión de organizar un tumulto para exigirle alimentos a Casa Tía. Cuando en 2002 salió en libertad, el movimiento se había consolidado. El hecho fue festejado con un

---

sin tomar el poder”. Prólogo de John Holloway a Raúl Zibechi, *Genealogía de la Revuelta (Argentina: la sociedad en movimiento)*, La Plata: Letra Libre, 2003, p. 9.

\* Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, *Entre la Ruta y el Barrio*, Buenos Aires: Biblos, 2003, p. 19. En otro trabajo, Svampa ilustra la situación “aristocrática” de la comunidad de YPF con la cita de un entrevistado: “No es lo mismo tener una relación de dependencia que tener un trabajo que va de generación en generación, porque mi abuelo trabajó (en YPF), mi padre trabajó (en YPF), y yo he salido a defender YPF porque si iba de generación en generación tendría que haber quedado para mi hijo.” M. Svampa, “Organizaciones de Trabajadores Desocupados: El Modelo de Gral. Mosconi”, en Inés González Bombal (comp.), *Nuevos Movimientos Sociales y ONGs en la Argentina*, Buenos Aires: CEDES, 2003, p. 51.

corte de ruta al son del estribillo. “Ay, ay, ay, ay; qué risa que me da: Cavallo está preso y Emilio en libertad”.\*

### **Los orígenes de la rebelión**

Los emergentes historiadores del piqueterismo argentino coinciden en que los años claves de su formación fueron 1996-2002. Pero el fenómeno no surgió de la nada, y los ya míticos acontecimientos de Cutral-Có fueron precedidos por procesos complejos en los que nuevas organizaciones populares conquistaron importantes espacios de poder a expensas del sindicalismo oficial y el aparato tradicional del Partido Justicialista.

Para comprender el fenómeno es preciso recordar que dicho aparato es una trama de punteros que pudo sobrevivir dieciocho años de proscripción de su partido gracias a su inserción en los estamentos inferiores de las burocracias estatales y a sus vínculos con el crimen organizado de barrio. Durante décadas el aparato ha seducido a vecinos humildes en numerosas localidades y vecindarios, facilitando trámites difíciles, desde entierros hasta la habilitación de pequeños negocios, a la vez que ha contado con los fondos necesarios para costear movilizaciones populares. Es una de las “instituciones subterráneas” emergidas del fracaso de las instituciones formales.†

Sin embargo, este aparato tradicional surgido con el primer peronismo (y con antecedentes lejanos en el viejo conservadurismo) estaba hecho a la medida de una clase baja y media-baja estructurada, con trabajo. Lo mismo es cierto del viejo sindicalismo. El permanente aumento de la desocupación, la sub-ocupación y el trabajo precario significó un deterioro del poder de ambos. Aunque la exclusión también se presta a la manipulación prebendaria, son otros los mecanismos y recursos necesarios para consumarla. Por cierto, en plena hegemonía del justicialismo, el incremento de la pobreza extrema, producto de los sucesivos fracasos de la clase política argentina, erosionó el poder de los punteros y la dirigencia sindical tradicional más que los dieciocho años de proscripción de su propio partido, entre 1955 y 1973.‡

---

\* Hernán Maglione, “Hace ocho años, en Cutral-Có comenzaba una forma de protesta que ganó tantos adeptos como detractores”, *La Capital* (Rosario), 29 de febrero de 2004. El estribillo alude a Domingo Cavallo, presidente del Banco Central de la dictadura militar, ministro y cerebro de la política económica de Menem y ministro también de De la Rúa.

† Guillermo O’Donnell ha empleado un concepto similar con referencia al clientelismo, al que califica de “institución extremadamente influyente, informal y a veces encubierta”. G. O’Donnell, “Illusions about consolidation”, *Journal of Democracy* Vol. 7(2), 1996, p. 40. El concepto de “instituciones subterráneas” que desarrollamos en el Capítulo 1 de *El Estado Parasitario*, “poder de veto” incluido, abarca pero excede a esta noción. Véase C. Escudé, *El Estado Parasitario: Argentina, ciclos de vaciamiento, clase política delictiva y colapso de la política exterior*, Buenos Aires: Lumière, 2005.

‡ En 1980, el 11,5% de los hogares estaba debajo de la línea de pobreza en Buenos Aires y su conurbano; en 1995, era el 25%. Los pobres eran el 21,5% de la población del país en 1991 y el 27% en 2000. En 1991 los indigentes sumaban el 3%, ascendiendo al 7% en 2000. J. Auyero, *op. cit.*, p. 28. Éste dice con acierto que “el año 1991 marca un enorme cambio en el vínculo funcional entre las tendencias macroeconómicas y los niveles de empleo. De allí en adelante, el crecimiento del PBI fue acompañado por un aumento del desempleo”. Ver Javier Auyero, *Poor People’s Politics: Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita*, Durham NC: Duke, 2000, p. 37. Este es el libro más inteligente y creativo sobre la nueva pobreza argentina que se haya publicado hasta la fecha.

Esas crisis, cuyas manifestaciones financieras más dramáticas hasta la década de los '90 habían sido plasmadas por hechos como el Rodrigazo de 1975 y los congelamientos de depósitos y/o estatizaciones de la deuda privada de 1982, 1985 y 1989, contribuyeron a la erosión institucional, estancamiento económico y permanente degradación de la estructura social, cuyo componente de marginación fue creciendo a lo largo de por lo menos treinta años. En 1991 se había recuperado la estabilidad monetaria merced a una grave violación del derecho de propiedad: el Plan Bonex de 1989, que fuera la reacción del gobierno de Menem a la crisis hiperinflacionaria heredada de Alfonsín. Entonces comenzó una ola de privatizaciones de empresas estatales y un proceso de inversión y endeudamiento sin merma del gasto público, que vino acompañada de alarmantes aumentos de la desocupación y la miseria.

A diferencia del ciclo de inversión y “endeudamiento virtuoso” vivido por el país entre 1890 y 1914, en este caso el “efecto derrame” anunciado por muchos economistas no se materializó, y a partir de 1998 cesó incluso el crecimiento de esa economía cuya riqueza estaba cada vez más concentrada. El endeudamiento público puede justificarse si contribuye al bienestar general, pero en aquel contexto ni siquiera Santo Tomás de Aquino (por no decir John Locke) hubiera condenado una creciente y vigorosa tendencia a la revuelta. El Estado, custodio del contrato social, había traicionado a sus partes reiteradamente.

### **El mercado de militantes**

Para comprender esta rebelión desde la lógica de la acción colectiva es preciso considerar la mutación estructural que se estaba produciendo en la Argentina.\* Por cierto, hacia mediados de la década de 1990 el *mercado de militantes* experimentó una transformación radical. Hasta ese momento, la gran mayoría de éstos tenía trabajo, y los dirigentes de organizaciones sindicales y de protesta tenían más que ganar ofreciendo sus servicios a empleados que a desempleados.

El cambio comenzó a insinuarse a principios de la década. La amenaza que sentían los trabajadores del Estado por el proceso de privatizaciones y el silencio de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había sido cooptada por el gobierno menemista, engendró condiciones propicias para la emergencia de una contestataria Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) conducida por Víctor De Gennaro, con afiliación y elecciones directas.

Ésta se formalizó el 12 de noviembre de 1992, principalmente gracias a la demanda de quienes se habían quedado sin trabajo o estaban a punto de sumergirse en esa situación. En ella los “trabajadores desocupados” tuvieron, desde el momento fundacional, el mismo reconocimiento que los “trabajadores ocupados”, a la vez que la protesta de los jubilados también encontró en su seno un reconocimiento activo y formal. De este modo, las ofertas tradicionales de la CGT “leal” conducida por Rodolfo Daer y de la moderada “disidencia” liderada por Hugo Moyano, quedaban desbordadas por el dinamismo de una organización

---

\* Recuérdese el precursor trabajo de Mancur Olson, *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.

que respondía a una nueva demanda.\* Estos hechos se complementan con datos como los que presentan Federico Schuster y Sebastián Pereyra, que informan que mientras el 75% de las protestas eran lideradas por sindicatos entre 1983 y 1988, su participación bajó al 60% entre 1989 y 1994, para desdibujarse por completo a partir de 1995.†

Como se ve, el proceso debe conceptuarse en términos de una lógica típicamente económica, la del mercado. Hasta mediados de la década, agrupaciones como el maoísta Partido Comunista Revolucionario (PCR) reclutaban militantes con empleo, cuyos intereses creían defender. Pero con el crecimiento vertiginoso de la desocupación, el ascenso de la CTA y el ocaso de la vieja CGT, era cada vez más claro que el juego de oferta y demanda favorecía a los proveedores de movilizaciones de desempleados más que a los ofertantes de servicios sindicales y asistenciales tradicionales.‡ El fenómeno también se vislumbró con la proliferación de clubes de trueque§ y redes de cartoneros\*\* que ofrecían opciones al creciente número de familias excluidas de la nueva economía. Este significativo cambio habrá pasado desapercibido para la dirigencia menemista, el FMI y el Banco Mundial, pero no para el PCR, que comenzó a concentrar su atención en los desocupados.

Lo mismo ocurrió con nuevas organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), vinculada al PCR, que fuera creada en 1994 y consolidada a partir de las ollas populares lideradas por Juan Carlos Alderete en 1996. Hasta entonces, la CCC tenía inserción sólo entre empleados estatales de Jujuy acaudillados por Carlos “Perro” Santillán, en el gremio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). Pero en 1998 instituyó su rama de trabajadores desocupados, que hacia 2005 es la mayoritaria. Fue recién a partir de mediados de la década de los ’90 que el desempleo creció lo suficiente como

---

\* En noviembre de 1996 se formalizó la ruptura entre la CGT leal y la disidente. Por su parte, la CTA fue reconocida oficialmente en 1997 como organización de tercer grado. Para calificar como tal, interrumpió la práctica del voto directo de sus afiliados.

† Federico Schuster y Sebastián Pereyra, “La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política”, en Norma Giarracca, *La Protesta Social en la Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el Interior del país*, Buenos Aires: Alianza, 2001, pp. 51-52. Los datos provienen de una investigación en que participaron dichos autores, en el seno del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

‡ En octubre de 1991 la tasa de desocupación era del 6,0%; en octubre de 1994 había ascendido al 12,2%; en octubre de 1996 ya era el 18%. Los desocupados y subocupados sumaban aproximadamente 1.600.000 de personas a comienzos de la década del ’90, para alcanzar unas 4 millones en el 2000. Cifras del INDEC; mediciones anuales basadas en el promedio de los datos de 28 centros urbanos que representan al 70% de la población urbana.

§ Las redes de trueques fueron inauguradas en 1995. Sus socios sumaban 1000 en 1996, 320.000 en 1999 y 500.000 en 2001. Luego fueron eclipsadas por la proliferación de fichas falsas, que según cálculos diversos llegaron a representar entre el 30 y el 90% del circulante. Ver Fabiana Leoni y Mariana Luzzi, “Nuevas Redes Sociales: Los Clubes de Trueque”, en Inés González Bombal (comp.), *Respuestas de la Sociedad Civil a la Emergencia Social*, Buenos Aires: CEDES, 2003, pp. 16-19.

\*\* Los “cartoneros” se dedican a la recolección y reciclado informal de residuos en las ciudades. En la segunda mitad década del ’90 comenzó a aumentar el porcentaje proveniente de otros oficios. Según un estudio, hacia 1999 había unos 25.000 cartoneros en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, es decir que aproximadamente 100.000 personas vivían de la actividad, y de ellos “el 50% habían sido trabajadores industriales asalariados que cayeron en la desocupación.” Ver Cristina Reynals, “De Cartoneros a Recuperadores Urbanos”, en Inés González Bombal (comp.), *op. cit.*, pp. 45-47. Sobre este tema, ver también Eduardo Anguita, *Cartoneros*, Buenos Aires: Norma, 2003.

para que estos agrupamientos se plantearan darles a los desocupados el lugar central en sus reivindicaciones.

La reconversión llegó incluso a los trotskistas, aunque más tardíamente. Opuesto ideológicamente al asistencialismo, el Partido Obrero se negó a participar del piqueterismo durante algunos años, pero en su congreso de diciembre de 2000 optó por plegarse a la lucha por los planes sociales a partir de una “valoración política táctica”, creando el Polo Obrero para trabajar sistemáticamente en torno de los desempleados.\*

Un indicador cuantitativo del crecimiento de la demanda de servicios de protesta para desocupados es el hecho de que, hacia principios de 2005, he podido identificar mucho más de una docena de agrupaciones que con antelación a su nombre portan los prefijos MTD (“movimiento de trabajadores desocupados”), MST (“movimiento sin trabajo”) y CTD (“coordinadora de trabajadores desocupados”).† Evidentemente, la estrategia de marketing de los ofertantes conduce a la diferenciación del rubro, que se exhibe como insignia. Se privilegia el tipo de servicio por encima de la orientación u origen ideológico del “movimiento”, que puede ser autonomista-radical, anarco-socialista, populista, peronista, guevarista, trotskista...‡

### **Las vertientes “sindical” y “villera” de la rebelión**

Las organizaciones descriptas hasta ahora (CTA y CCC), al igual que otras como el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que acaudilla Raúl Castells,§ tienen su origen en una exitosa reacción frente al sindicalismo tradicional. Están constituidas principalmente por ex empleados públicos y de las empresas estatales privatizadas, muchas veces con el apoyo de partidos políticos de izquierda y sectores eclesiásticos radicalizados. Corresponden a lo que llamaremos “vertiente sindical” de la

---

\* Esta organización, cuyo referente es Néstor Pritola, sería protagonista del lanzamiento del Bloque Piquetero Nacional el 5 de diciembre de 2001, en consonancia con el guevarista Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y la leninista Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa). La versión del Partido Obrero de la historia de la nueva protesta puede consultarse en Luis Oviedo, *Una Historia del Movimiento Piquetero: de las primeras coordinadoras al argentinazo*, Buenos Aires: Ediciones Rumbos, 2004.

† MTD-Teresa Rodríguez; MTD-AV; MTD-Aníbal Verón; MTD-Aníbal Verón/Nacional; MTD La Juanita; MTD Solano; MTD Resistir y Vencer; MTD Evita; MTD 26 de Junio; MTD Maximiliano Kosteki; MTD La Verdad; Movimiento Independiente de Desocupados Organizados (MIDO); MST-TV (Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive); MST-IU; CTD-AV (Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón); UTD (Unión de Trabajadores Desocupados); UTEDOCH (Unión de Trabajadores Desocupados y Changarines), etc. Hay también una pléyade de MTDs con nombres de localidades y provincias.

‡ Una percepción convergente, desde la izquierda, puntualiza que: “(la política menemista) destruyó (...) la resistencia obrera, las fábricas, los barrios, los espacios de sociabilidad, y debilitó a los sindicatos. Pero también tuvo una consecuencia imprevista: tendió a homogeneizar una parte de los sectores populares, hasta entonces fuertemente estratificados entre las diferentes categorías de obreros—calificados, semi y no calificados—al empujarlos fuera del sistema formal y arrebatarles sus derechos laborales y ciudadanos. (...) No se trata sólo de una cuestión cuantitativa, de mirar el índice de desocupación y ver cómo fue evolucionando a lo largo de la década. Esos índices no recogen los datos centrales: cómo se vive la desocupación, si aún se conservan esperanzas de conseguir un empleo (...)” Es así cómo se produjo lo que yo conceptualizo como una transformación del mercado de militantes. R. Zibechi, *op. cit.*, p. 9.

§ Castells fue originalmente militante del Movimiento al Socialismo (MAS) y su organización, parte de la CCC.

rebelión, para diferenciarlas de otras agrupaciones que venían emergiendo desde antes aún y que confluyeron con éstas.

A este segundo conjunto lo bautizaremos “vertiente villera”, y está constituido principalmente por organizaciones nacidas de los procesos de ocupación de tierras fiscales y privadas. Emergió con los ya viejos asentamientos ilegales, tolerados incluso en la etapa de decadencia de la dictadura, y en medida mayor durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con el apoyo de las estructuras del peronismo clientelista y algunos segmentos del clero.\* Ambas vertientes están estrechamente entrelazadas, al punto de que Alderete, recién mencionado en relación con la CCC, tuvo su origen político en la usurpación de las tierras en que se asentó el Barrio María Elena de La Matanza, a mediados de la década de 1980.

Como recuerda Denis Merklen, el autor que más ha investigado este importante tema,

“Las primeras ocupaciones ilegales de tierra tuvieron lugar en 1981 con la invasión de terrenos en la zona sur del Gran Buenos Aires. El movimiento se extendió luego como una modalidad privilegiada de acceso al hábitat popular puesto que las organizaciones barriales llegaron a tener un rol importante en la manifestación de políticas sociales. Con los asentamientos comienza a desarrollarse un vasto movimiento de organizaciones barriales que supera con mucho el marco de las ocupaciones ilegales”.<sup>4</sup>

El movimiento creció enormemente cuando los diques de la represión cedieron al colapsar la dictadura militar. Hacia 1985 se tomaron los terrenos que dieron lugar a los asentamientos de El Tambo, El Privado, 17 de Marzo, 22 de Enero, Costa Esperanza, Villa Adriana, San José, San Alberto, Villa Unión, Km. 25, La Juanita, todos emplazados en La Matanza. Estas usurpaciones engendraron organizaciones comunitarias que evolucionaron hacia reivindicaciones de derechos sociales más amplios, abarcativos del trabajo, la educación y la salud.<sup>†</sup>

Ciertamente, al decir de Isabel Rauber (una historiadora de origen argentino instalada en La Habana desde hace casi treinta años), el movimiento piquetero argentino es producto del “mestizaje de la experiencia sindical (que hace de la huelga un instrumento fundamental en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores), y la que surge de la toma de tierras (que organiza la población en torno de la supervivencia en zonas urbanas).”<sup>‡</sup>

---

\* Esta clasificación sigue los lineamientos ya ensayados por Isabel Rauber, “Cerrar el paso abriendo caminos: piquetes y piqueteros en la Argentina de la crisis”, Revista *Rebelión*, noviembre de 2002; M. Svampa y S. Pereyra, *op.cit.*, y Astor Massetti, *Piqueteros: Protesta Social e Identidad Colectiva* (Buenos Aires: Editorial de las Ciencias/FLACSO, 2004).

† Denis Merklen, *Asentamientos en La Matanza: la terquedad de lo nuestro*, Buenos Aires: Catálogos, 1991, p. 112. Señala este autor que el 73% de las familias que tomaron tierras eran del propio partido de La Matanza, el 11% provenía del resto de la región metropolitana, y el 14% de la Capital Federal, de manera que se trataría de un fenómeno intra-urbano. Cf. I. Rauber, *op. cit.*, p. 5.

‡ I. Rauber, *op. cit.*, p. 5 y 10 de la versión en documento PDF de Internet, en [www.rebelion.org](http://www.rebelion.org). La autora es la historiadora de la CTA y realizó entrevistas en profundidad a los principales dirigentes piqueteros. Varios de sus trabajos están disponibles en el citado sitio web cubano, “Rebelión”.

## **El Tambo: un caso emblemático de la vertiente villera**

Sin duda, para entender qué es lo que ha ocurrido en la Argentina de las últimas décadas, cuáles son las características del país actual, y porqué hay ciertos cambios en las reglas del juego que son irreversibles a pesar de que resultan subversivos si se analizan a la luz de la Constitución y las instituciones demócrata-liberales de esta República, es indispensable recordar la historia de los asentamientos ilegales de la década de 1980. Éstos han sido prácticamente olvidados excepto por algunos analistas de izquierda cuyo objetivo, reivindicatorio, no ha sido el de comprender la dinámica política e institucional que diera origen a un Estado parasitario e involutivo.

El epicentro del proceso estuvo en el Partido de La Matanza,<sup>\*</sup> y hay dos caminos disponibles para rescatar sus características más importantes: remitir a las mencionadas obras de Merkle y rescatar el testimonio oral del principal dirigente de una vasta organización que tuvo su origen en la usurpación de tierras, Luis D'Elía.

Según confesó éste al diario *Página 12* en agosto de 2002,<sup>†</sup> el antecedente más lejano del crítico proceso de toma ilegal de terrenos que dio lugar a los revolucionarios asentamientos de La Matanza fue protagonizado por los sectores progresistas del clero. Cuenta que:

“En el '81, (durante) una de las luchas más grandes contra la dictadura, (se tomó) una foto famosa de (monseñor) Novak parando las tanquetas de los milicos, impidiendo el desalojo de la gente en El Tala. Fue una cosa heroica, una reivindicación de los sectores cristianos del carajo. (...) Se ve que a eso lo estuvimos incubando durante tres o cuatro años, hasta que lo hicimos nosotros.”

El proceso se aceleró durante el gobierno de Alfonsín, con las inundaciones de 1985, que dejaron barrios enteros bajo el agua y mucha gente evacuada. D'Elía era un joven que trabajaba en las comunidades eclesiales y fue enviado a capacitarse a Quilmes “con los curas que armaron todas las grandes tomas de los '80”.

Según la narración del caudillo piquetero, elegir los predios les llevó tres meses. El 6 de enero de 1986 comenzó una secuencia de usurpaciones que culminó el 18 de marzo de ese año, día en que “fueron tapa de diarios”:

“Ubicamos las tierras de El Tambo, que eran de (un tal) Abraham Muñoz. (...) Primero tomamos la mitad, hasta el arroyo. (El dueño) venía a amenazarnos, era un matón... Yo tenía una contradicción. Era muy pichón, venía con toda la onda de la no violencia, era el maestrillo del barrio. Pero me había juntado con (...) todos los pesados que decían ‘los vamos a cagar a tiros’ (...) Al final preparamos la toma de todo el terreno. (...) Nos quedamos ahí y no nos fuimos más. Terminamos tirándole la casa abajo a Muñoz.”

---

\* Con 1.300.000 habitantes, este distrito industrial empobrecido del conurbano bonaerense es uno de los mayores polos de población marginal de la Argentina.

† Lo que sigue es un resumen de un reportaje a Luis D'Elía publicado por el diario *Página 12* el 19 de agosto de 2002 y reproducido en Internet en el portal “Espacios Políticos: La Primera Red Federal de Ciencia Política”, URL <http://www.espaciospoliticos.com.ar/otros/delia.htm> .

En una primera etapa los propietarios intentaron desalojarlos:

“El Tambo era un desbole, lleno de carpas, un tolderío. Estábamos acomodándonos y un día los Muñoz organizan una represión. (...) Entonces Núñez (...) agarró y distribuyó a la gente en herradura para defender el lugar, puso a otros sobre los techos del barrio vecino, con palos, piedras, escopetas, 9 milímetros... Los Muñoz entraron disparando en un Torino azul sin patente, acompañados por dos patrulleros. Y la gente les respondió. Les empezaron a tirar y les rompieron todos los coches. Los agujerearon de lado a lado. Nuestra única víctima fue un pibe, Maciel, que le estropearon una pierna. (...) Quedaron los coches todos agujereados. Habían tirado los grandes, los chicos, todo el mundo. Fue la gesta histórica de El Tambo, el 23 de enero del '86.”

Las fuerzas del orden finalmente dejaron de molestar a los usurpadores porque los medios televisivos controlados por el gobierno radical brindaron su apoyo a los asediados asaltantes. Según recuerda D'Elía: “Mona Moncalvillo, que tenía un programa en ATC, vino y transmitió en vivo. Toda la prensa empezó a debatir y la exposición pública quebró a los tipos. Ahí nos consolidamos.”

Posteriormente se produjo el afianzamiento del barrio:

“Yo conduje todo ese proceso que terminó en el '94 entregándole a cada vecino su escritura. Nos cooperativizamos, le compramos al Estado nacional en 250 mil dólares. Hoy El Tambo es un asentamiento modelo. Casi todos los vecinos son propietarios, tenemos asfalto, teléfono, luz, estamos haciendo el gas, tenemos un dispensario sanitario donde vas y te dan los medicamentos, los análisis, dos guarderías, el colegio, el polideportivo... es un barrio con mucho orgullo, con mucha chapa, con mucha cosa conseguida. Y yo soy una figura muy pesada en mi barrio. La autoridad no te la da un cargo ni una asamblea, la autoridad te la da un proceso de construcción.”

### **Los saqueos y ollas populares de 1989 y 1990**

El detalle de estos procesos tal como emerge del racconto de D'Elía nos permite vislumbrar, desde un nivel micro, la emergencia de una de las instituciones subterráneas cuya función en el Estado parasitario fuera conceptualizada en el Capítulo 1 de mi libro de 2005, *El Estado Parasitario*. El paso siguiente en su consolidación fue la participación de los vecinos de este tipo de asentamiento ilegal, que proliferó, en los saqueos y ollas populares de 1989 y 1990.

Se recordará que éstos se produjeron a raíz de los dos brotes hiperinflacionarios, desencadenados respectivamente antes de la renuncia precipitada de Alfonsín, y poco después de la asunción de Menem.\* En el episodio de 1989 los saqueos duraron algunos

---

\* Entrevistas realizadas por antropólogas a vecinos de asentamientos nacidos de la toma ilegal de tierras confirman el protagonismo de éstos en los acontecimientos de 1989 y 1990. “Los (...) barrios (...) habían

días, entre fines de mayo y principios de junio, reproduciéndose en casi todos los grandes conglomerados urbanos del país, aunque fueron particularmente numerosos en los cinturones industriales de Rosario y Buenos Aires.<sup>5</sup> En La Matanza, José C. Paz y San Miguel (partido de General Sarmiento) prácticamente no quedaron supermercados ni comercios grandes sin saquear. Según el gobierno bonaerense actuaron bandas armadas que incluso portaron ametralladoras. Una vez perpetrados los grandes saqueos, hubo barrios que se levantaron en pie de guerra entre sí, acusándose de la intención de saquearse mutuamente.\* Antropólogas que trabajaron con vecinos de Villa Mitre y Las Calas, de San Miguel, documentaron que en los vecindarios insurgentes había entre ocho y diez personas armadas por cuadra.

Según María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino, “la filiación entre los saqueos, las ollas y los comedores que hoy se observan en los barrios es explícita”. Usando las palabras de algunos de sus entrevistados: “El comedor comunitario fue creado a partir de los saqueos (...) Nos vimos en la necesidad de crear una fuente de alimentación, organizar algo para poder dar de comer (...) a criaturas, gente, madres embarazadas, madres solteras (...)” La investigación revela que las ollas populares fueron el aspecto de la insurrección menos destacado por los medios, a la vez que el que tuviera mayor impacto y proyección:

“Se obtenían los alimentos (...) de los aportes de los que tenían algún ingreso, de los acopios de saqueos, pero mayoritariamente los municipios y comerciantes de la zona eran los que ‘colaboraban’”. (...) A partir de ese momento, los gobiernos municipales comenzaron a ser proveedores de alimentos en forma continua o discrecional, en una situación de ‘emergencia’ que devino en permanente.”

En otras palabras, la olla popular con aportes de pequeños burgueses lugareños y del erario público local fue un emergente de los saqueos perpetrados en 1989 y 1990 por vecinos de los asentamientos que, cuatro años antes, habían nacido de la usurpación a veces violenta de tierras fiscales y privadas, que fue el necesario emergente de las violaciones crónicas de los DPM, mucho más graves.

### **El surgimiento de una “institución subterránea”**

Por cierto, descripto con pinceladas gruesas, este fue el manantial de donde brotó una gran organización que hacia 1995 precedió a los piqueteros en su papel de adjudicadores de planes sociales del Estado.

---

surgido pocos años antes que los saqueos. Todos los entrevistados coincidían en evocar la historia de la constitución de los asentamientos (...). Se recordaba con detalle la intensidad de las interacciones (para encarar (la conformación de un) ‘barrio’ al estilo de los que rodeaban a las tierras tomadas.” Ver María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino, “Los saqueos y las ollas populares de 1989 en el Gran Buenos Aires. Pasado y presente de una experiencia formativa”. *Revista de Antropología*, Vol. 44 (2), 2001. Disponible en URL [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-77012001000200005](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012001000200005).

\* Según *Página 12*, los villeros fueron alentados a protagonizar una mini-guerra civil por la policía, que proveyó de uniformes diferentes a los habitantes de cada vecindario “para poder diferenciarlos a ustedes cuando los ataquen los de enfrente.” Los rumores de ataques mutuos abarcaban a varias villas: Mitre, Las Calas, Primavera, Santa Brígida y Vucetich. Ver Neufeld y Cravino, *op. cit.*

Por aquellos tiempos la provincia de Buenos Aires emitía sus planes “Vidas” y “Barrios”, distribuidos por punteros y “manzaneras”.<sup>\*</sup> Cuando con el apoyo de la Cooperativa El Tambo, un grupo de éstas se rebeló contra su jefa, confeccionaron una versión propia del censo municipal de desempleados. Lograron imponerlo en La Matanza. La nueva herramienta se utilizaría para distribuir los planes sociales, y las manzaneras en cuestión consiguieron que el Estado provincial les delegara la función de adjudicar un porcentaje de los mismos bajo el paraguas de un nuevo agrupamiento, la Red Alimentaria, luego convertida en Red de Barrios, que armó una trama de comedores populares con las diez toneladas mensuales de alimentos que obtuvieron del Estado para distribuir. Del barrio de D’Elía se avanzó pues a un circuito inter-barrial de dimensiones importantes.

Este es otro eslabón crucial en el proceso, de larga data, a través del cual agrupaciones populares *ad hoc* fueron ocupando lugares de autoridad y poder dejados vacantes por la pérdida de gobernabilidad. La Red de Barrios tuvo éxito forjando un entramado con ONGs dedicadas a los derechos humanos, medio ambiente, salud, educación, la mujer, etc., al estilo de los fenómenos de desarrollo de “redes inter-organizacionales” de solidaridad que estudia Pablo Forni.<sup>†</sup>

La incipiente institución dio otro paso hacia adelante cuando en 1997, con la mirada complaciente de algunos sacerdotes, vecinos de distintos asentamientos tomaron el oratorio salesiano del Sagrado Corazón para reclamar planes de empleo. Según Svampa y Pereyra, la toma duró 24 días y permitió el primer encuentro con lo que luego sería el núcleo de la CCC.<sup>6</sup> También en 1997, la Red se solidarizó con los docentes, participando de la Carpa Blanca que se instaló frente al Congreso de la Nación, y estableció relaciones con De Gennaro y su CTA.

Casi todo esto aconteció antes de los hechos casi mitológicos de Cutral-Có, de 1996. Y de esta manera, la vertiente villera del movimiento piquetero argentino confluía con la de origen sindical, en una misma rebelión signada por objetivos afines. Finalmente, el 18 de julio de 1998, la Red se convirtió en la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) en el marco de la CTA, proponiendo una militancia centrada en la cuestión de los asentamientos urbanos ilegales, la ocupación de tierra por parte de campesinos y los derechos de los desempleados.<sup>7</sup> Según reconoce el propio D’Elía, hacia 1997 el principal eje de actividad de la Red ya había virado de la tierra al trabajo, debido al crecimiento de la demanda de servicios de protesta para militantes desocupados.<sup>‡</sup>

---

\* La organización asistencial creada por Hilda “Chiche” Duhalde, esposa del entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

† Pablo Forni, “Las Redes Inter-Organizacionales y sus implicancias en el desarrollo de las Organizaciones Comunitarias de los Pobres y Excluidos. Estudios de Caso en el Gran Buenos Aires durante la década del noventa.” Trabajo presentado al Seminario Regional sobre “ONGs, Gobernancia y Desarrollo en América Latina y el Caribe”, organizado por la UNESCO (MOST) en Montevideo, 28-30 de noviembre de 2001. Accesible desde el URL:

<http://www.unesco.org.uy/most/seminario/ongs-gobernancia/documentos.html>

‡ Entrevista citada del diario *Página 12*. Según el referido artículo D’Elía dijo textualmente: “En el acta de fundación el objetivo declarado siguió siendo la lucha por la tierra, pero la cuestión del trabajo empezaba a aparecer como el principal eje.”

## **Los estallidos provinciales**

Estos complejos procesos ilustran de qué manera los fracasos sucesivos del Estado argentino y su festival de licuaciones trajeron aparejadas consecuencias de muy largo plazo, con el menoscabo de instituciones centrales para el orden. Ya hacia mediados de la década del '90, antes de que el fenómeno piquetero adquiriese su virulencia y visibilidad posterior, organizaciones populares dedicadas a la usurpación de propiedad pública y privada habían adquirido legitimidad frente a grandes segmentos de opinión y ante el Estado mismo, que les cedía parcelas de poder al permitirles distribuir planes asistenciales.

Por otra parte, el fermento de rebelión popular estaba presente en la mayor parte del territorio nacional. Por cierto, otro salto cualitativo en el espiral de la protesta argentina, que enlaza las usurpaciones y saqueos de la década del '80 con el posterior movimiento piquetero, fueron los estallidos provinciales producidos a partir de 1992. Revueltas de grandes proporciones contra sistemas políticos frecuentemente denotados por el nepotismo provocaron la destitución de los gobiernos de Corrientes, Jujuy, Salta y Santiago del Estero.

Se produjeron robos, saqueos, e incendios de residencias de autoridades y de los edificios de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). En muchos casos estas revueltas estuvieron precedidas de varios meses de salarios impagos al personal estatal. En particular, el “santiagueñazo” es señalado por algunos autores como un punto de inflexión importante en la emergencia de lo que eventualmente se transformaría en el movimiento piquetero. Estos derrocamientos de déspotas provinciales no sólo contribuyeron a generar el clima que poco después diera lugar al piqueterismo, sino que fueron todo un anticipo de la caída de Fernando de la Rúa a fines de 2001.<sup>8</sup>

## **El gobierno de la Alianza y el salto cualitativo del parasitarismo proletario**

Aunque el florecimiento de las organizaciones parasitarias del proletariado argentino se debe a la confluencia de los complejos procesos esbozados, algunos de los cuales se remontan, como se dijo, a antes del gobierno de Alfonsín, el abortado gobierno aliancista representó un importante punto de inflexión en varias de sus dimensiones.

Por cierto, la gestión de Fernando De la Rúa representó la consolidación y maduración de la rebelión popular argentina. Durante ese intervalo:

Las organizaciones que habían nacido para hacer frente a la demanda de servicios de protesta para desempleados, o que habían evolucionado hacia esa especialidad, comenzaron a usar sistemáticamente y con éxito los métodos ensayados por los piqueteros precursores en escenarios como el de Cutral-Có. El corte de ruta se extendió a la región metropolitana de Buenos Aires;

Las agrupaciones se convirtieron en ONGs y accedieron al derecho de ser ellas mismas las administradoras de los paquetes de planes sociales conquistados, convirtiéndose así en auténticas instituciones informales que forman parte de la red de poder del Estado;

Hubo episodios de represión con pérdida de vidas de militantes, que siempre redundaron en derrotas políticas para el gobierno nacional;

Se produjo una cierta connivencia entre el justicialismo bonaerense, el gobierno provincial y la rebelión piquetera, para asestar golpes políticos contra el gobierno nacional. En alguna medida, se trató también de una manipulación de la rebelión por parte del peronismo.

Ciertamente, con la asunción del gobierno de De la Rúa en diciembre de 1999, el movimiento ya había multiplicado su actividad y dispersión geográfica. El 13 de diciembre se organizó una protesta relativamente pequeña frente al ministerio de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, con participación de militantes del MTD Teresa Rodríguez,<sup>\*</sup> Quebracho<sup>†</sup> y el Movimiento La Patria Vencerá.<sup>‡</sup> Provenían de varios distritos bonaerenses (La Plata, Quilmes, Florencio Varela, Lanús, La Matanza). El mayor logro para los revoltosos fue la posibilidad de administrar ellos mismos la distribución de los planes conquistados, una atribución sin precedentes que se convirtió en norma.

En verdad, fue política del gobierno aliancista que las agrupaciones de desocupados se instituyeran formalmente como organizaciones civiles con personería jurídica, adquiriendo de tal manera una cobertura legal que les permitiría operar como ONGs, facilitando su autonomía en la administración de grandes paquetes de planes. Esto significó también una pérdida de poder para los punteros de los aparatos partidarios tradicionales, principalmente del justicialismo, que durante la década del '90 habían exigido el cumplimiento de tareas de militancia a cambio de los Planes Trabajar.<sup>9</sup>

Obviamente, estas labores beneficiaban a los aparatos políticos de los municipios y por consiguiente a los propios punteros. Transferido el gobierno nacional a la alianza de la Unión Cívica Radical y el FREPASO, los nuevos gobernantes prefirieron consolidar el contrapoder de los piqueteros antes que permitir que los planes adjudicados siguieran beneficiando al aparato de sus competidores políticos.

Como veremos, este juego de suma cero entre los dos principales partidos operaría una y otra vez para ampliar el espacio de poder y legitimidad de las instituciones *ad hoc*, obtenido por métodos extorsivos e ilegales que fueron convalidados por la prensa y la opinión pública progresista.

---

\* El MTD Teresa Rodríguez estaba vinculado en sus orígenes al guevarismo de la década de 1970, y en especial al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Desde 1998 se llama MTR (Movimiento Teresa Rodríguez), siendo Roberto Martino su principal figura. En 2001 impulsó el Bloque Piquetero Nacional, al que abandonó en 2003.

† El Movimiento Popular de Unidad Quebracho (MPU-Q) se conformó durante el primer gobierno de Menem, con fuerte composición de clase media universitaria. Emergió de sectores de la Juventud Intransigente de La Plata. Con el tiempo incorporó a militantes de origen popular, del peronismo revolucionario y de la izquierda guevarista, constituyéndose en el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (MPR-Q).

‡ El Movimiento La Patria Vencerá (MPV) fue una agrupación emergida de Descamisados, a su vez una organización del peronismo revolucionario de la década del '70. Datos sobre las diversas agrupaciones pueden obtenerse en M. Pacheco, *op. cit.*, y en M. Svampa y S. Pereyra, *op. cit.* Éste contiene un apéndice incompleto pero informativo dedicado al tema.

## **La manipulación de la rebelión piquetera por el justicialismo**

Muy pronto, sin embargo, se pondría de manifiesto el potencial destructivo de las nuevas organizaciones frente a la débil alianza oficialista. Reaccionando contra reiteradas violaciones de la ley y desmanes diversos que no habían sido reprimidos por el gobierno anterior, el ministro del Interior Federico Storani se puso duro con los manifestantes que durante seis días cortaron el puente correntino de General Belgrano, armados con gomeras y piedras. El 18 de ese mes la Gendarmería, amparada por un apagón, arremetió contra los tumultuosos. Murieron dos piqueteros, Mauro Ojeda y Francisco Escobar, generando una grave crisis para el ministro.\*

Las muertes, aún relativamente escasas, no impidieron el crecimiento del fenómeno. A la vez, la reacción indignada de la ciudadanía frente a la represión legal ilustró tanto la intolerancia a la muerte violenta vigente en la cultura argentina desde la caída de la última dictadura militar, como la relativa legitimidad adquirida por esta rebelión cuya metodología consiste en violaciones sistemáticas de la ley y el orden.

El siguiente paso en la evolución del movimiento fue su irrupción en el cinturón conurbano de Buenos Aires. Se vislumbró claramente el 28 de junio de 2000, cuando quinientos militantes de la CCC, la FTV y el MIJD, entre otras agrupaciones, cortaron la Ruta 3 a la altura de Isidro Casanova, Partido de la Matanza. Una misa fue oficiada por un sacerdote en medio del camino bloqueado.

El gobierno negoció y los piqueteros cosecharon 650 mil kilos de comida fresca, 70 mil de alimentos secos, medicamentos, un número de planes sociales adicionales que serían administrados por las organizaciones de revoltosos, y cinco millones de pesos en ATN (Aportes del Tesoro Nacional) para el Consejo de Emergencias de la Municipalidad de La Matanza. Algunos de los referentes más representativos de la rebelión popular, por caso D'Elía, coinciden con investigadores como Astor Massetti en señalar a este corte como un punto de inflexión importante debido a la cantidad de manifestantes, la diversidad de los agrupamientos involucrados, la centralidad de los sucesos, la calidad de su organización y los resultados obtenidos.<sup>10</sup>

Sin embargo, el Estado incumplió su promesa de transferir los ATN. Esto conllevó a otro episodio de grandes proporciones, involucrando esta vez a miles de militantes que cortaron la misma ruta en el mismo lugar entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre. Ni lerdos ni perezosos, el gobernador justicialista de la provincia, Carlos Ruckauf, responsabilizó al gobierno aliancista de la situación, a la vez que el sindicalista de la CGT disidente Hugo

---

\* Antes de eso, el 12 de abril de 1997 en Cutral-Có, Teresa Rodríguez se había convertido en la primera baja de un corte de ruta. Posteriormente la lista de bajas piqueteras se engrosó con Aníbal Verón, que cayó en Tartagal el 10 de noviembre de 2000; Carlos Santillán y José Barrios, que fueron muertos el 16 de junio de 2001 en General Mosconi, provincia de Salta; y Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que perdieron sus vidas el 26 de junio de 2002 en el puente Pueyrredón de Avellaneda. La historia de las bajas piqueteras, contada con ribetes épicos desde la perspectiva de la celebración de la revuelta y la condena a las fuerzas del orden, puede encontrarse, entre varias otras fuentes, en Iván Schneider Mansilla, *Piqueteros: Una Mirada Histórica*, Buenos Aires: Astralib, 2003.

Moyano, vilipendiado por las nuevas agrupaciones, intentó congraciarse con las huestes arribando al lugar del piquete con una camioneta cargada de alimentos.

Moyano, representante de un sindicalismo más tradicional, se había aliado con Ruckauf el mes anterior y ahora ofrecía a los piqueteros movilizar su facción de la CGT para convocar a un paro nacional que exigiera soluciones para los desocupados. La jugada, según contaba el matutino *Página 12* ese día, era evitar que la CTA capitalizara el conflicto, llevar agua para el molino del gobierno provincial y generar grandes costos políticos para el gobierno nacional, cuyo blanco más visible era la ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide.

Así se conformó una alianza táctica contra el gobierno de De la Rúa, que incluyó a la dirigencia piquetera, el gobierno provincial, el intendente de La Matanza Alberto Balestrini y la CGT disidente.<sup>11</sup> Frente a esta trama, el Poder Ejecutivo Nacional no podía apelar a la represión desnuda que había utilizado en Corrientes en diciembre de 1999, y que en ese mismo momento empleaba en Jujuy contra los docentes que habían cortado la ruta 34.<sup>12</sup> Más aún, aunque hubiera tenido el coraje necesario, le faltaba poder territorial, ya que habría necesitado de los servicios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que respondía a Ruckauf.

De esta manera, otra vez se ponía de manifiesto el hecho de que el juego político era de suma cero incluso entre las “fuerzas del orden”, cuya lucha competitiva permanentemente despejaba espacios políticos para las instituciones *ad hoc*, que a su vez se abrían paso por medio de sucesivas violaciones extorsivas de la ley. Éstas eran toleradas porque la lucha entre el gobierno y la oposición, y entre diferentes sectores del justicialismo, fue siempre más importante para sus protagonistas que bregar por los intereses permanentes de la nación poniendo coto a las violaciones de la ley y la Constitución. De esta manera, las instituciones informales fueron generando sucesivos hechos consumados, en un gradual proceso de transformación de la geografía institucional argentina.

El episodio de octubre-noviembre de 2000 se pareció, en su estructura, a la crisis que produjo el derrocamiento de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. El oficialismo acusó al intendente Balestrini de agravar el problema social intencionalmente, demorando en La Matanza la entrega de alimentos frescos adquiridos con fondos nacionales. Los legisladores de la UCR se plegaron a la imputación de que el intendente avalaba el piquete y alentaba la insurrección. Los piqueteros, a su vez, reclamaban que el gobierno nacional entregue al Consejo de Emergencia Social, que dependía del gobierno municipal de La Matanza, los adeudados cinco millones de pesos en ATN. El gobierno nacional respondía que debido a un cambio en los procedimientos, los municipios ya no podían recibir ese tipo de fondos, pero ofrecía el triple de su valor en alimentos. Los revoltosos rechazaban la oferta, y el ministro Storani señalaba que la CCC y la CTA parecían alineadas con la gobernación, ironizando: “Son los únicos piqueteros del mundo que piden efectivo para el municipio”.<sup>13</sup>

Desde el piqueterismo se justificó la actitud aduciendo que el dinero daba mucha más autonomía a las organizaciones que el pago en especie, posibilitando usos alternativos de los recursos, como pavimentación de calles de asentamientos, compra de medicamentos,

reparación de escuelas, adquisición de herramientas, etc. Ideólogos de la rebelión arguyeron que, más que el típico “botín del clientelismo peronista”, este episodio fue parte de un proceso de modificación de las relaciones Estado/barrios.<sup>14</sup> En todo caso, y con o sin corruptela, lo que la anécdota ilustra es el proceso de descomposición del Estado y la ocupación de espacios por parte de nuevas instituciones. Éstas proceden con una metodología extorsiva y violatoria de la ley, que les sirve para adquirir derechos a través de hechos consumados.

Por cierto, según la contabilidad de Massetti la protesta se dio por terminada a cambio de:

1. El mantenimiento de 6400 Planes Trabajar;
2. 2500 planes adicionales;
3. 5000 planes “BONUS” y
4. 2500 “Segunda Oportunidad” (planes de empleo transitorio especiales para La Matanza);
5. 1250 kilos de alimentos secos mensuales, durante un año, provenientes del erario nacional;
6. 420 mil kilos del erario provincial; 1400 kilos del erario municipal, y
7. Dos millones de pesos en ATN.<sup>15</sup>

### **El aumento del poder piquetero**

Estos logros demostraron que el corte de rutas era una buena metodología para obtener recursos (especialmente si se contaba con el apoyo indirecto de un gobierno provincial interesado en socavar las bases del gobierno nacional). También aumentaron mucho el prestigio de referentes como D’Elia y Alderete. Su poder iba en aumento gracias al juego de suma cero entre justicialistas y aliancistas, que no respondía a ninguna variante reconocible de los intereses de largo plazo del país sino a intereses políticos de corto plazo. Aunque el crecimiento de este poder dependía del conflicto tortuoso entre los dos grandes partidos, cada espacio ocupado por las nuevas organizaciones representaría un hecho consumado casi imposible de revertir.

La metodología de los grandes cortes proliferó, registrándose algunos episodios considerados históricos por los panegiristas de la rebelión. Tal el caso del corte de once días de la ruta 4 en el cruce con Don Bosco, frente a la empresa de electricidad privatizada Edenor, en Morón, provincia de Buenos Aires, entre el 11 y el 22 de febrero de 2001. El corte principal fue acompañado de cortes menores en varias localidades de Buenos Aires (Bernal, Estaban Echeverría, Florencio Varela, Quilmes), y también en cuatro rutas diferentes de la provincia de Jujuy.<sup>16</sup>

Frente a la nueva intransigencia del gobierno, que ya no responsabilizaba al justicialismo tanto como a grupos y partidos de extrema izquierda, se organizó un nuevo corte de grandes proporciones entre el 6 y el 23 de mayo, esta vez en el emplazamiento tradicional de la ruta 3 a la altura de Isidro Casanova. Este corte fue secundado por cortes menores en la Boca, Florencio Varela, La Plata, Morón, Tigre, los puentes Pueyrredón y Uriburu, las rutas 26, 197 y Panamericana, y la céntrica Plaza de Mayo, en Buenos Aires, como también en las

provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, Neuquén y Río Negro. Esta medida de 18 días consiguió la revisión de procesos judiciales abiertos a piqueteros en la provincia de Buenos Aires, la renovación de los planes asistenciales que estaban por caducar y la adjudicación de 7500 planes adicionales.

Con estas acciones se solidarizaron públicamente algunos personajes locales ajenos al mundo piquetero, como Hebe de Bonafini (presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo), el sacerdote Luis Farinello y los cantantes Teresa Parodi e Ignacio Copani, demostrando que la rebelión crecía en prestigio y respetabilidad frente a grandes sectores de la población. El convenio colectivo multisectorial se firmó en el palacio municipal de La Matanza con la participación de la ministra de Trabajo Patricia Bullrich.<sup>17</sup>

Todavía restaba más de medio año para los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado civil contra De la Rúa, pero ya estaba claro que, ganara quien ganara las elecciones, en la Argentina solo podría gobernar el justicialismo, debido a su relativa capacidad para manipular a las “Mazorcas de La Matanza”, enlazadas con sus redes clientelistas.\* Estructuralmente, el país ya era incompatible con la democracia liberal instituida por su Constitución.

### **El derrocamiento**

Por su parte, las instituciones subterráneas piqueteras terminaron de consolidarse poco antes de dicho golpe con la realización, en el Oratorio del Sagrado Corazón, de la primera y segunda “Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados,” el 24 de julio y 4 de septiembre de 2001 respectivamente. El golpe de Estado *no* fue perpetrado por los agrupamientos de desocupados, pero sí por masivas patotas de La Matanza cuyos integrantes participan de los mismos. Éstas fueron digitadas por los mismos caudillos justicialistas que en ocasiones anteriores habían manipulado a las agrupaciones de protesta para debilitar al gobierno aliancista. Pero esta vez los peronistas fueron secundados por jefes del radicalismo bonaerense, que decretaron la cesación de una gestión presidencial que temían condujese al eclipse definitivo de su partido.†

En ocasión del derrocamiento de De la Rúa se saquearon supermercados grandes como Auchán, Carrefour, Disco, Makro y Norte. Se asaltaron también pequeños comercios en las localidades bonaerenses de Ciudadela, José C. Paz, José León Suárez, Moreno, San Isidro, San Martín y San Miguel; en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, y asimismo en barrios de la Capital Federal. Se prendió fuego incluso en el interior del Ministerio de Economía. A esas alturas, ya nadie sabía quién era quién, como que aún no se sabe.

---

\* Algunos de estos conceptos fueron parcialmente plasmados bajo el fragor de los acontecimientos, en mis artículos “Vicios políticos autodestructivos”, diario *BAE (Buenos Aires Económico)*, 26 de diciembre de 2001; “Se disuelven el contrato social y el Pacto Federal”, *BAE*, 30 de enero de 2002; “Hacia la fundación de la Segunda República”, *BAE*, 5 de febrero de 2002; “Hacia la dictadura de Duhalde”, *BAE*, 12 de febrero de 2002; “La Argentina, paria internacional”, *BAE*, 7 de marzo de 2002; “Ascenso y caída de la ciudad de los argentinos”, *BAE*, 26 de marzo de 2002.

† Eduardo Aulicino, “De la Rúa hizo acusaciones y ya se escuchan respuestas y reproches”, *Clarín*, 4 de abril de 2002. El principal acusado fue Leopoldo Moreau, quien según el depuesto presidente De la Rúa habría actuado con la omisión cómplice de Raúl Alfonsín.

Pocos días después, el derrocamiento del nuevo mandatario Adolfo Rodríguez Saá no sólo fue precedido por hechos similares sino también por un asalto al Congreso Nacional, cuyas puertas fueron abiertas desde adentro. Cuando en la localidad bonaerense de Chapadmalal, en el contexto de una reunión de gobernadores, la residencia presidencial fue rodeada por una turba agresiva y el Presidente constitucional fue privado de agua, corriente eléctrica y hasta de su escolta, éste huyó escondido en un auto para renunciar desde su provincia natal, donde se sentía seguro porque allí eran sus aliados quienes controlaban a la policía local.\* Ese hecho demostró que el presidente no sólo debía ser peronista, sino que además debía contar con el aval del justicialismo bonaerense. Sin esa condición no se puede gobernar desde Buenos Aires.

### **El fenómeno piquetero en números**

Hacia mediados de 2004, algunas de las principales agrupaciones piqueteras se repartían militantes y planes sociales de la siguiente manera:

- La FTV, aproximadamente 125.000 miembros con 75.000 planes sociales.
- La CCC, 50.000 subsidios del Estado sobre un total de 70.000 miembros.
- El MIJD, 60.000 miembros y 7000 planes sociales.
- *Polo Obrero*, 20.000 subsidios totalizando unos 25.000 miembros.
- *Barrios de Pie*,<sup>†</sup> 60.000 miembros con 7000 subsidios.
- El Frente de Trabajadores Combativos,<sup>‡</sup> unos 7000 piqueteros con 2500 planes sociales.
- La Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa), unos 4680 miembros con 1140 subsidios estatales.<sup>18</sup>

A mediados de 2004 había alrededor de 200.000 planes asistenciales, pero por cada diez desocupados que cobraba había tres o cuatro en la lista de espera de los dirigentes de las organizaciones. Un aspirante a beneficiario debe demostrar que está dispuesto a participar activamente de la protesta. La mayoría de quienes protestan no comería si no piqueteara, pero tampoco piquetearía si la protesta no le resultara redituable. Hay en esto una interesante dialéctica. El Estado les paga porque piquetean, lo que casi equivale a decir que les paga para piquetear, y los aspirantes a la prebenda deben mostrar su disposición para el piquete ante el caudillo que distribuye la canonjía.

Según algunos cálculos, los piqueteros son la principal empresa del Estado.<sup>19</sup> Ellos contestarán que eso es el producto del desmantelamiento del éste y que allí está,

---

\* 'Incendio en el Ministerio de Economía', *Clarín*, 19 de diciembre de 2001; 'Noche de terror en el Congreso', *Clarín*, 30 de diciembre de 2002; 'La sociedad civil pierde la paciencia contra los políticos al descubrir la realidad de un país en quiebra', *El País* (Suplemento Dominical), Madrid, 6 de enero de 2002; 'Una pacífica protesta de clase media que terminó con el asalto al Congreso argentino', *El Mundo*, Madrid, 30 de diciembre de 2002. Citados en Carlos Escudé, "Argentina, a 'parasite state' on the verge of disintegration", *Cambridge Review of International Affairs*, Volumen 15 (3), octubre de 2002.

<sup>†</sup> Una organización que proviene de la vertiente villera y responde a Patria Libre. Su referente es Jorge Ceballos.

<sup>‡</sup> El agrupamiento piquetero del MAS (Movimiento al Socialismo).

precisamente, la vergüenza nacional que los privó de una vida asegurada en el paraíso social de YPF. Agregarán que los 20 millones mensuales que según otros cálculos se reparten entre ellos, no son gran cosa.<sup>20</sup> Como vimos, Francisco Macri no podría contradecirlos. En cualquier caso, hay una gran paradoja en este fenómeno de organizaciones que se definen como progresistas pero terminan exigiendo planes para desempleados ideados con la lógica clientelista más tradicional, y así quedan atrapadas en el estilo de política al que tanto critican. La extrema izquierda y el peronismo de base más populista quedan enlazados en las mismas redes, con tácticas convergentes y conductas equiparables.

Este es el resultado inevitable de la dura competencia por el mercado de militantes en tiempos de desempleo masivo. Independientemente de su ideología, que pasa a segundo plano, las agrupaciones son unidades micro-económicas proveedoras de servicios de protesta para desocupados. Compiten por afiliados y por planes. Están obligadas a ser revolucionarias y clientelistas al mismo tiempo. Cortan rutas, extorsionan a un Estado que por razones políticas no quiere o no puede reprimir, obtienen planes para repartir, y se nutren de este apoyo oficial de la manera en que una célula maligna se nutre del alimento del cuerpo. Así ganan más poder para el próximo corte extorsivo. Y cuando los muchachos circulan por una autopista, no pagan peaje. Como el Estado mismo, ninguna concesionaria se arriesga a exigir el cobro.

El único dinero que reciben los militantes proviene de los planes sociales que las agrupaciones ofertantes de servicios de protesta arrancan de un Estado débil que requiere de estas y otras negociaciones *ad hoc* para mantener la gobernabilidad.\* Con sus 150 pesos los piqueteros subsidiados deben sobrevivir, contribuyendo con una cuota mensual aproximada de tres pesos para financiar gastos generales de la organización y comprar alimentos para los comedores. Tienen la obligación cuasi-contractual de concurrir a sus centros de acción popular de lunes a viernes cuatro horas por día. Típicamente, allí y en los piquetes mismos se toma lista, bajo apercibimiento de excluir a los ausentes crónicos de las listas de beneficiarios. Como lo dijera Gerardo Young del matutino *Clarín*, la rutina es siempre la misma: “se corta una ruta, se consiguen planes, se comparte la miseria”.<sup>21</sup>

Simultáneamente, se consolidan organizaciones con un sentido de disciplina propio, en las que incluso no faltan los uniformes *ad hoc*. Y hay jerarquías internas. Las asambleas en que se toman decisiones son dominadas por hombres con trayectoria reconocida y facilidad de palabra, muchas veces con un pasado violento. Después de la asamblea una mesa chica investida de poder fija fecha y hora para los piquetes no anunciados: así se intenta evitar la infiltración de los servicios y la policía. A la vez, se instituyen dispositivos de seguridad con militantes que se encargan de proteger las columnas, marchando al frente y a los costados armados con palos, y frecuentemente engalanados con un distintivo. Aquí también hay fuerte presencia femenina: a veces, cerca de la mitad de los integrantes de los cordones de seguridad son mujeres.

---

\* Por ejemplo, las reuniones entre los gobernadores y el presidente, que no forman parte de las instituciones formales, pero que frente al colapso del Estado federal fueron indispensables para la gobernanza en los meses álgidos de la crisis.

Estos guardias son un obstáculo para la infiltración de la columna por parte de extraños, impiden que ésta se disgregue, y evitan que parezca rala frente a observadores externos. También mantienen a raya a los propios, impidiendo que personal no autorizado por ellos mismos concorra armado o cargando piedras. Controlan incluso el consumo de bebidas alcohólicas, que suele estar prohibido durante un piquete. Hacia afuera las agrupaciones pueden representar la anarquía, pero hacia adentro impera un claro sentido del orden y una estudiada organización, con cabecera, cordón perimetral, cordón frontal y “liberos” (pesos pesados que anteceden a todos).<sup>22</sup>

### **Los servicios sociales, cimientos de la identidad colectiva**

Los subsidios del gobierno son hábilmente distribuidos por los dirigentes piqueteros. Los comedores comunitarios son el cemento social más efectivo de sus organizaciones. Hacia fines de 2004 la FTV maneja unos 2000 comedores populares y Barrios de Pie otros 800. Entre los “duros”, el MIJD coordina 1050 comedores, el trotskista Polo Obrero unos 560 y la leninista CUBa otros 28. Allí se alimentan padres, hijos y abuelos con comidas elaboradas en emblemáticos hornos de barro, de los que ya existen varios miles esparcidos en comedores populares de todo el país.\*

En esta y otras expresiones de solidaridad fraternal, las mujeres tienen un papel preponderante. Según algunos cálculos, manejan el 80% de los centros piqueteros. Son ellas quienes cargan con la mayor parte del trabajo productivo. Frecuentemente dedican mucho más que las dieciséis horas semanales estipuladas por el ministerio de Trabajo para titulares de planes sociales. Tejen, cocinan, arreglan ropa y controlan la asistencia a los actos piqueteros. Denuncian a los ausentes, tanto si se trata de tareas formalmente asignadas en razón de los planes, como si se incurre en un faltazo a una protesta, la más obligatoria de todas las faenas. En las palabras de un equipo de investigadores:

“¿Qué hacen los hombres? En la vereda, toman mate, pintan paredes, cavan una zanja o conversan. ¿Qué hacen las mujeres? A toda máquina, dentro de la casita, cosen ropa, preparan la leche para los chicos, toman lista, calculan cuánto durarán

---

\* Viene al caso recordar aquí un fenómeno relativamente menor, que complementó a los servicios sociales ofrecidos por las organizaciones piqueteras en lo peor de la crisis: las numerosas asambleas de barrio que emergieron en diciembre de 2001. Se consolidaron transitoriamente en enero-febrero de 2002, formando incluso organizaciones inter-barriales de asambleas. A diferencia de los piqueteros y las redes de clubes de trueque y de cartoneros, estas asambleas se caracterizaron por un mayor porcentaje de miembros de clase media y mediana edad, con frecuencia vinculados a partidos de izquierda. Combinaron la toma de una sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires y la organización de ollas populares, con “cine-debates, talleres de apoyo escolar, charlas de economistas de izquierda, algunos recitales, festejos para el Día del Niño y otras actividades culturales.” Ver Maristella Svampa, “El Análisis de la Dinámica Asamblearia”, en Inés González Bombal (comp.), *Nuevos Movimientos Sociales y ONGs en la Argentina*, Buenos Aires: CEDES, 2003, p. 29. Quizá el análisis más completo del fenómeno se encuentre en Graciela Di Marco y otros, *Movimientos Sociales en la Argentina – Asambleas: La Politización de la Sociedad Civil*, Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín y Jorge Baudino Editores, 2003. Algunos proyectos vigentes a la fecha de estas asambleas también pueden consultarse en Graciela Di Marco y Héctor Palomino (comp.), *Construyendo Sociedad y Política: Los Proyectos de los Movimientos Sociales en Acción*, Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín y Jorge Baudino Ediciones, 2004.

las reservas de comida, organizan las actividades o lo que hay que llevar al piquete.”<sup>23</sup>

Esta red de seguridad social con fuerte protagonismo femenino es la piedra basal de un movimiento—acaudillado por hombres—cuya dinámica emerge de una poderosa experiencia colectiva que combina la protesta violenta con la solidaridad. Sus redes incluyen huertas, bibliotecas, asistencia escolar, enfermeros que vacunan y laboratorios para análisis clínicos.\*

Lentamente, se van desarrollando una cultura y una identidad con símbolos propios. Las cubiertas de automóvil con que cortan caminos, encendidas, humeantes, con su aroma de caucho en combustión, son uno de ellos. Las caras semi-tapadas y los intimidantes palos de algunos también se convierten en elementos identitarios.

Asimismo, hay una mística que pretende justificar una violencia por ahora acotada. Ellos aducen que 75 niños muertos por día debido a la extrema pobreza también es violencia. Esta mística se complementa con el odio, principalmente hacia la policía (que “respeto a los dirigentes y se especializa en perseguir a los más chicos”), pero en cierta medida también hacia punteros, intendentes y diputados. Y finalmente, este *ethos* se completa con la alegría que nace de la mancomunidad entre hombres, mujeres y niños en que se entremezclan garrotes y cochecitos infantiles. Tal como dijo Neka Jara, de la Coordinadora Aníbal Verón de Quilmes:† “Es lindo el piquete, sentís que existimos, sentís la libertad. Es que en los barrios hay mucha bronca con la cana. Entonces eso en los piquetes se refuerza. Tenés el poder”. O como dijera otra militante, “La gente viene con una necesidad y encuentra una lucha.”<sup>24</sup>

### **Arte y música piquetera: cultura e identidad de la institución subterránea**

Pero no sólo está la cultura asociada a la violencia. También tienen su arte y su música, que nos dan la pauta de que se trata de instituciones que están más arraigadas en la Argentina que la Constitución, a la que nadie canta. En una entrevista conducida por Isabel Rauber, Luis D’Elía decía:

“Cuando todas las clases sociales están en crisis los únicos que dicen ‘acá estamos’, ‘los villeros somos esto y aquello,’ son los sectores más empobrecidos. Y el conflicto se expresa en la cumbia villera y la cumbia piquetera. (...) La cumbia villera, con un fenomenal odio hacia las fuerzas de seguridad desde (...) una reivindicación de la no-ley. (...) La cumbia piquetera, en que se expresan las reivindicaciones de nuestra lucha (...). Yo creo que toda la cumbia piquetera es de una clara coherencia ideológica. La diferencia es de contenido: una reivindica las luchas y la otra grafica lo que sucede en la clase social, en la villa, con el afane, con la represión...”<sup>25</sup>

---

\* Existen pocos casos análogos en el mundo. Uno de ellos es el Hamas, una organización terrorista islámica por ahora mucho más peligrosa que los piqueteros argentinos, que al igual que ellos ancla su poder popular en la solidaridad que practica en conjunción con sus delitos. No es, sin embargo, financiada por su enemigo (el gobierno israelí), y esto marca una significativa diferencia con el caso argentino, cuyos piquetes subsidiados son la consecuencia autóctona más notable del colapso de las instituciones.

† Vinculada al grupo político Quebracho.

Por cierto, hay una Argentina nueva, fea y paupérrima pero orgullosa y con su propia identidad, irreconocible para la burguesía y clase media típica. Su historia está contada por músicos piqueteros como Aníbal Kohan,<sup>26</sup> que cantan a la gesta de “Santa Revuelta” con temas como la chacarera “Yo soy el desocupado”, el romance “Muerte de Aníbal Verón”, la murga “Postmotudo y pelodermo” y el cuartetazo “María Julia es un incendio”. Para difundir su cultura publican libros y revistas. También montan una pléyade de páginas web, algunas muy elaboradas, como *El Culebrón Timbal*, un colectivo cultural dedicado a historietas, teatro y música sobre la realidad social y la lucha en el conurbano bonaerense.

No sólo sufren y militan. También saben divertirse. Algunos lo consiguen muy creativamente, y un pequeño porcentaje hasta refinadamente. Es verdad que en estos emprendimientos participa un contingente de jóvenes intelectuales de clase media seducidos por el drama y su epopeya, pero esto sólo ilustra la legitimidad adquirida por el movimiento frente a grandes segmentos de la ciudadanía, en casi todos los estratos sociales. En el seno de una sociedad que se descompone va surgiendo un cuerpo social nuevo constituido por la población expulsada. Ésta rehúsa morir, se reorganiza, lucha como puede, no respeta las leyes que la excluyeron, y crea sus propias expresiones culturales, símbolos y jerarquías.

### **Conclusiones**

La institución subterránea que ha engendrado esta nueva identidad es simultáneamente consecuencia y causa, en ese orden, de la tragedia argentina. Mientras sus agrupaciones reclaman trabajo genuino, sus militantes se acostumbran a vivir de la prebenda. Éstos no son ángeles ni demonios. Sufren hambre, manipulan el padecimiento de otra gente y albergan intencionalidades políticas de las que no se avergüenzan. Son el engendro de una implosión del Estado que es a su vez el producto de la acumulación de décadas de corrupción pública y privada, y de un oportunismo cortoplacista agravado por quienes buscaron comprar la moderación de las organizaciones incipientes, ofreciendo a sus dirigentes los planes sociales con que se nutrió su poder subversivo del orden constitucional. El suyo es el parasitarismo proletario, que es la imagen especular del parasitarismo burgués, del país quebrado y endeudado con cuentas privadas en el exterior que superan a la deuda, y con cientos de miles de ahorristas estafados en Italia y el Japón, además de los muchos millones de argentinos defraudados. El movimiento piquetero es la lacerante consecuencia social e institucional del festival de licuaciones que violó los DPM durante tres décadas, canalizando recursos desde los pobres hacia los ricos.

Analíticamente, nuestro estudio sobre los agrupamientos de la pobreza militante nos remite a las siguientes conclusiones:

- 1) El crecimiento desmesurado del hambre y la desocupación produjo un esperable aumento en la demanda de servicios de protesta para desamparados y desocupados. Así emergieron organizaciones rebeldes, primero en el ámbito de la propiedad de la tierra y luego en el sindical. Éstas no sólo desafían puntualmente a las instituciones instituidas por la ley, sino al mismísimo Estado de derecho.

2) Con su auge también disminuyó el poder de los aparatos sindicales y partidarios tradicionales.

3) Ante el creciente poder disruptivo de las agrupaciones contestatarias, el Estado cedió dinero (para los planes), espacios de protagonismo (como las ollas y comedores populares) y segmentos de poder (al delegar la distribución de subsidios). Incluso les regaló prestigio desde los medios oficiales de comunicación masiva, consciente del rédito electoral que eso reportaba.

4) Las instituciones *ad hoc* así nacidas adquirieron legitimidad frente al público y se convirtieron en depositarias de derechos adquiridos. Normativamente, puede suponerse que la usurpación de tierras por parte de los pobres es menos grave que la socialización de la deuda privada de empresas solventes y la confiscación masiva de depósitos bancarios por parte del propio Estado, que es el custodio del contrato social. No obstante, el hecho representa un paso adicional en un proceso de involución institucional de largo plazo. Implica un significativo agravamiento de la inseguridad jurídica y un sideral aumento del riesgo país. Esto no significa cargar las culpas sobre los militantes y sus agrupamientos sino señalar que el proceso que condujo a este emergente fue costoso para casi todos los argentinos (aunque para algunos más que para otros.)

5) El problema fue agudizado por la manipulación política de las instituciones subterráneas por parte de los grandes partidos. Particularmente graves fueron la decisión del gobierno de la Alianza de convertir las agrupaciones en ONGs que administraran los planes sociales, y la táctica del justicialismo bonaerense de aliarse a los grandes cortes de ruta para debilitar a De la Rúa.

6) Cuando se acudió a la represión legal, el gobierno sufrió enormes pérdidas políticas. Cuando ésta condujo a la muerte de revoltosos, la crisis fue casi terminal para los ministros involucrados. El presidente De la Rúa, ya depuesto, estuvo a punto de ir preso por bajas de manifestantes que, aunque hayan sido culposas, ni siquiera pueden atribuirse a su jefe de policía. Al parecer, la pérdida de tolerancia pública a la muerte violenta de civiles fue una de las consecuencias del proceso de deterioro institucional que culminó con el colapso de la dictadura militar de 1976-83. Aunque en circunstancias extremas, la muerte de relativamente pocos militantes que violan la ley es aceptada como inevitable en la mayor parte de los países democráticos, ello no es así en la Argentina. La consecuencia es que el Estado queda inerme, sin poder utilizar sus armas.\*

---

\* La represión del asalto al cuartel de La Tablada del 23 de enero de 1989 (gobierno de Alfonsín), perpetrado por 40 militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), fue la última vez que fuerzas policiales y militares reprimieron un hecho subversivo con energía. Rodearon el cuartel tomado con 3500 efectivos. Se produjeron 39 muertes, 28 entre los asaltantes y 11 entre policías y militares. Según denuncia de los guerrilleros, cuatro de sus bajas habrían sido ejecuciones extrajudiciales. También alegan seis desapariciones adicionales. Las reverberaciones políticas de estos sucesos contribuyeron a restarle legitimidad a toda represión legal de actos de violencia ilegal cometidos por grupos de militantes o manifestantes. Enrique Gorriarán Merlo, el guerrillero de largo prontuario que lideró a los insurgentes, fue amnistiado el 20 mayo de 2003 por el presidente Duhalde, mediante un decreto de necesidad y urgencia. El decreto incluía el indulto del coronel “carapintada” Mohamed Alí Seineldín, que el 3 de diciembre de 1990 había intentado derrocar a Menem. En esa ocasión se produjeron 13 muertes. Seineldín había intentado tres golpes de Estado previos, en abril de 1987, y en enero y diciembre de 1988, durante la presidencia de Alfonsín.

7) Un indicador de este fenómeno es el hecho de que especialistas como Svampa y Pereyra dan por supuesto que las bajas piqueteras fueron asesinatos. En su importante estudio dicen: “La represión ordenada por los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales, llevada a cabo por un reforzado sistema de seguridad compuesto por las fuerzas de Gendarmería Nacional, Policía Federal y policías provinciales y, más recientemente, complementadas con (...) Prefectura, ha culminado con el asesinato de numerosos manifestantes y militantes piqueteros en distintos lugares del país.”<sup>27</sup>

8) En cambio, la opinión académica, política, periodística, y del público en general, tiene una actitud bien diferente cuando la violencia viene del otro lado. Es significativo que, sin consecuencias, Luis D’Elía confesara a *Página 12* que en 1986 él y su gente defendieron a tiros las tierras usurpadas en El Tambo, destruyendo la casa del propietario original. Se trata del mismo piquetero que en 2004 dirigió la toma y destrucción de una comisaría. Con esto no digo que no le asistiera un derecho natural a hacer estas cosas. Sólo señalo el doble estándar en la evaluación de la violencia de unos y otros, como un dato más.\*

9) Frente a esta dinámica, la trama de la organización política y social se fue pareciendo cada vez menos a la que está formalmente instituida por las leyes y la Constitución, como consecuencia de un proceso que no puede revertirse por obra de simple voluntarismo.

Por todo lo dicho, desde un punto de vista científico debemos concluir que (al contrario de lo que sugieren Svampa y Pereyra) no es sorprendente que haya surgido un importante movimiento de desocupados en la Argentina. Este emergente se engarza con el proceso de destrucción institucional que acompañó a tres décadas de violaciones sistemáticas de los DPM, que por su magnitud no tienen precedentes en países comparables con la Argentina. Una vez fracasada la dictadura de 1976-83, el deterioro institucional vino acompañado por la deslegitimación de toda violencia represiva.

Este fue un cambio cultural crucial para la comprensión de esta historia. A partir de ese momento el Estado quedó sumido en la impotencia frente a fenómenos como la usurpación de tierras y los cortes de ruta extorsivos. Si agregamos el cambio estructural producido en el mercado de militantes, caracterizado por el aumento sideral de la demanda de servicios de protesta para desocupados, algo parecido al movimiento piquetero debía forzosamente nacer en este país.

Para el caso argentino, por lo tanto, no tiene vigencia el argumento sociológico que ha insistido “en el conjunto de dificultades, tanto de carácter objetivo como subjetivo, que atraviesa la acción de los desocupados y que impide que estos se conviertan en verdadero actor colectivo.” Se torna irrelevante la “problemática vinculada con el hecho de que los desocupados se hallan ‘fuera’ de la estructura social y no ocupan por ello ‘ningún lugar’.”

---

\* En lo que atañe a una justicia esencial, creo personalmente que, por lo menos en una sociedad rica en recursos naturales por habitante que ha sido próspera en un pasado no lejano, cuando la demanda de organizaciones de protesta para desocupados supera la demanda de organizaciones para trabajadores con empleo, se ha cruzado el umbral a partir del cual puede justificarse moralmente el ejercicio del derecho a la revuelta enunciado por Santo Tomás de Aquino, el Padre Suárez, Luis de Molina y John Locke. No obstante, y sin desmedro de ese hecho, como científico social debo registrar el dato del estándar doble señalado.

Ni es de importancia “la heterogeneidad de las bases y trayectorias sociales” de los desempleados.<sup>28</sup> Lo que sí es de significación es que las crisis sucesivas condujeron a:

- Que la represión resultara intolerable aunque fuera legal y necesaria, y
- Que los desocupados superaran a los trabajadores en el mercado de militantes.

Así emergió el segmento proletario del Estado parasitario argentino, que es la contrapartida de los sectores parasitarios de su clase política, burguesía y burocracia. Si un Estado no puede o no quiere reprimir, y si sus desocupados se multiplican de a millones, supurará piqueteros o algo similar.

Una variable crucial para la gobernabilidad de este tipo de Estado será la disponibilidad de recursos, por parte de un gobierno, para invertir en la moderación, cooptación y manipulación de las organizaciones de la pobreza. Así lo demuestra la experiencia del gobierno de Kirchner, que pudo estabilizarse gracias a los abundantes dineros provenientes de las retenciones a exportaciones cuyo valor internacional aumentó a partir de 2002. Pero la Constitución ya no tiene vigencia. Es un adorno. El cemento del país actual no es el de sus instituciones formales, que apenas ocultan el verdadero orden. Ya no vivimos en una república representativa, aunque el exótico sistema que nos supimos conseguir todavía pueda esconderse tras una fachada de legitimidad democrática. Una parte significativa del poder político real está depositado en una coalición de cabecillas que mandan sobre grandes bandas con jurisdicción territorial, y que mantiene vínculos informales complejos con policías, jueces, políticos y traficantes diversos. Los viejos “aparatos” partidarios se entretejen con las nuevas agrupaciones piqueteras, en parte autónomas pero también dependientes de prebendas que permiten manipularlas. La ficción de legalidad sirve para consolidar este orden extralegal. La justicia se blande para castigar los desafíos a esta ilegalidad informalmente instituida.

Por ello, y tal como los sucesos de diciembre de 2001 lo demostraran, cuando el Poder Ejecutivo carece de los recursos necesarios para cooptar a las bandas, la supervivencia o derrocamiento de un presidente dependerá del consenso de una docena de caudillos, no de las instituciones establecidas por la Constitución. Si en un momento de debilidad de la presidencia, los jefes del justicialismo bonaerense se suman a los principales dirigentes piqueteros para que una multitud hostil rodee la Casa Rosada, y ordenan que se le corten la electricidad, el teléfono y el gas al mandatario, la policía no se les va a oponer y éste huirá de la sede del gobierno colgado de un helicóptero. Esto puede no volver a ocurrir, pero que no acontezca es cosa que no depende de las instituciones formales sino de la fluctuante opulencia de la billetera de un gobierno, y de la voluntad de personajes que muchas veces ni siquiera ocupan un cargo oficial.

## NOTAS

---

- <sup>1</sup> D. Muchnik, *op.cit.*, p. 54-57.
- <sup>2</sup> Nicolás Iñigo Carrera, “Las Huelgas Generales, Argentina, 1983-2001: Un Ejercicio de Periodización”, en *Pimsa 2001*, Documento de Trabajo N° 33, Buenos Aires, 2002.
- <sup>3</sup> *Ibidem*, p. 37. Sus datos son elaborados a partir de un relevamiento de protestas recogidas por medios gráficos argentinos.
- <sup>4</sup> Denis Merklen, *Pobres Ciudadanos: las clases populares en la era democrática argentina, 1983-2003*, Buenos Aires: Editorial Gorla, 2005, p. 51. Véase también *Asentamientos en La Matanza: la terquedad de lo nuestro*, Buenos Aires: Catálogos, 1991, y “Inscription territoriale et action collective. Les occupations illégales de terres urbaines depuis les années 1980 en Argentine”, Paris, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, tesis de doctorado, 2001.
- <sup>5</sup> Nicolás Iñigo Carrera, María Celia Cotarela y otros, “La Revuelta: Argentina 1989-90”, Documento de Trabajo N° 4, Pimsa, 1995.
- <sup>6</sup> Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, *Entre la Ruta y el Barrio*, Buenos Aires: Biblos, 2003, p. 47.
- <sup>7</sup> Mariano Pacheco, “Del piquete al movimiento - Parte 1: De los orígenes al 20 de diciembre de 2001”, Cuaderno de la FISYP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) N° 11, enero de 2004. Accesible desde el URL <http://fisyp.rcc.com.ar/11.Piqueteros.pdf>.
- <sup>8</sup> Véase Marina Farinetti, “Violencia y risa contra la política en el Santiagueñazo”, *Apuntes* N° 6, Buenos Aires, 2000, y “Los significados del ‘Santiagueñazo’, un estallido social”, en *Ordinaire Latino-Americain* N° 188, Toulouse 2002, cf. D. Merklen, *op.cit.* 2005, p. 53. Véase también Javier Auyero, *La Protesta*, Buenos Aires: Libros del Rojas (UBA), 2002.
- <sup>9</sup> M. Pacheco, *op. cit.*, p. 24.
- <sup>10</sup> Astor Massetti, *Piqueteros: Protesta Social e Identidad Colectiva* (Buenos Aires: Editorial de las Ciencias/FLACSO, 2004, p. 25.
- <sup>11</sup> Fernando Almirón, “De Gennaro y Moyano preparan un paro en apoyo a los piqueteros”, *Página 12*, 4 de noviembre de 2000, cf. A. Massetti, *op. cit.*, pp. 27-28.
- <sup>12</sup> A. Massetti, *op. cit.*, p. 28.
- <sup>13</sup> Laura Vales y Fernando Cibeira, “Los piqueteros rechazaron una oferta del gobierno”, *Página 12*, 3 de noviembre de 2000, cf. A. Massetti, *op. cit.*, pp. 29-30.
- <sup>14</sup> A. Massetti, *op. cit.*, p. 30, citando sin precisión a Denis Merklen.
- <sup>15</sup> *Ibidem*, p. 31.
- <sup>16</sup> *Ibidem*, pp. 31-33.
- <sup>17</sup> Isabel Rauber, “Cerrar el paso abriendo caminos: piquetes y piqueteros en la Argentina de la crisis”, *Revista Rebelión*, noviembre de 2002, p. 9, y A. Massetti, *op. cit.*, pp. 34-38.
- <sup>18</sup> “El movimiento piquetero en números”, infografía que acompaña al artículo de Daniel Gallo, “Quién es quién en el dividido mapa piquetero”, *La Nación*, 28 de junio de 2004.
- <sup>19</sup> José Benegas, “Los piqueteros son hoy la principal empresa del Estado”, *Ámbito Financiero*, 4 de julio de 2002.
- <sup>20</sup> Lucas Guagnini, Gerardo Young y Alberto Amato, “Piqueteros: El Estado les da casi 20 millones al mes - Parte IV”, *Clarín*, 26 de septiembre de 2002.
- <sup>21</sup> Gerardo Young, Lucas Guagnini y Alberto Amato, “Piqueteros: La cara oculta del fenómeno que nació y crece con el desempleo - Parte I”, *Clarín*, 26 de septiembre de 2002.
- <sup>22</sup> A. Massetti, *op. cit.*, p. 119.
- <sup>23</sup> Gerardo Young, Lucas Guagnini y Alberto Amato, “Piqueteros: las mujeres empujan y van al frente”, *Clarín*, 1° de septiembre de 2002.
- <sup>24</sup> Gerardo Young, Lucas Guagnini y Alberto Amato, “Piqueteros: los cortes de ruta y el clima de violencia – Parte II”, *Clarín*, 26 de septiembre de 2002.
- <sup>25</sup> Isabel Rauber, “El piquete y los multifacéticos magnetismos de la música”, *Revista Rebelión*, 15 de abril de 2003, accesible desde el URL <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4857>.
- <sup>26</sup> Anibal Kohan, *A las Calles!*, Buenos Aires: Colihue, 2002.
- <sup>27</sup> M. Svampa y S. Pereyra, *op. cit.*, pp. 17-18.
- <sup>28</sup> M. Svampa y S. Pereyra, *op. cit.*, p. 13, primer párrafo de la Introducción a su Obra.